



DOÑA MARÍA DOLORES PAGÁN ARCE, SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día nueve de marzo de dos mil dieciséis, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, el Consejo de Gobierno acuerda:

PRIMERO.- El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, manifiesta su voluntad de adhesión al compartimento Fondo de Liquidez Autonómica y el compromiso de cumplirlo dispuesto en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, en los Acuerdos del Consejo de Política fiscal y Financiera, los Acuerdos adoptados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos relacionados con este mecanismo, en el Programa para la aplicación de dicho fondo para el ejercicio 2016, que figura como anexo del presente Acuerdo, así como lo previsto en cualquier disposición que desarrolle este mecanismo de financiación.

SEGUNDO.- Dejar sin efecto el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 2 de marzo de 2016, referente la voluntad de adhesión al comportamiento compartimento Fondo de Liquidez Autonómica del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y su compromiso de cumplir lo dispuesto en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, y en sus disposiciones y acuerdos de desarrollo.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la presente en Murcia a nueve de marzo de dos mil dieciséis.



**PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DEL COMPARTIMENTO FONDO DE LIQUIDEZ
AUTONÓMICO DEL FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA
EL EJERCICIO 2016**

I. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, creó un mecanismo de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas, de carácter temporal y voluntario, que permite atender las necesidades financieras de las Comunidades Autónomas, mientras persistan las dificultades de acceso a los mercados financieros. Posteriormente, el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, ha configurado dicho mecanismo como un compartimento del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, conteniéndose en él la normativa aplicable al mismo, al quedar derogado el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio.

Así, en el artículo 22.3 del citado Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, se prevé que dentro de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Consejo de Gobierno que la Comunidad Autónoma adopte debe integrarse el cumplimiento de lo dispuesto en el citado Real Decreto-ley, en los Acuerdos del Consejo de Política fiscal y Financiera, los Acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, así como en el programa que resulte de aplicación, el cual se desarrolla en el presente documento. Todo ello, sin perjuicio de cualquier disposición que desarrolle el mecanismo de financiación.

Por tanto, este programa recoge las características financieras y resto de condiciones aplicables a las operaciones de crédito que el Estado concierte con cada una de las Comunidades Autónomas. Estas condiciones son de carácter general y se aplicarán a todas las Comunidades Autónomas participantes en el compartimento del Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio 2016, y siguientes en caso de prorrogarse, sin perjuicio de las condiciones particulares que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (en adelante CDGAE) para la respectiva Comunidad Autónoma.

II. ENTRADA EN VIGOR DEL PROGRAMA DE APLICACIÓN PARA 2016

Para la aplicación efectiva del presente programa será necesario que cada Comunidad Autónoma se comprometa jurídicamente a cumplir los términos del mismo mediante un acuerdo de su Consejo de Gobierno.

La adhesión a este mecanismo de financiación en 2016 o su continuidad si la Comunidad Autónoma ya se encontraba adherida con anterioridad, supondrá la aceptación por la Comunidad Autónoma, de todas las condiciones establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad



Financiera, en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los Acuerdos adoptados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos relacionados con este mecanismo, y las condiciones y el procedimiento para la utilización por las Comunidades Autónomas de los recursos procedentes del compartimento fondo de liquidez autonómico contenido en el presente Programa, así como lo previsto en cualquier disposición que desarrolle este mecanismo de financiación.

Este Programa se incluirá, como anexo, en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Autonómico que la Comunidad Autónoma adopte para adherirse al mecanismo o permanecer en él. Igualmente, este Programa resultará de aplicación en el supuesto de que la Comunidad Autónoma se incorpore al mecanismo, en virtud de lo previsto en la Disposición adicional primera, apartado séptimo, de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

III. CONDICIONES FINANCIERAS Y OTRAS CONDICIONES PARTICULARES.

La adhesión a este mecanismo conlleva la aceptación por la Comunidad Autónoma de las condiciones financieras establecidas en los artículos 5 y 24 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, tal y como se desarrollan a continuación:

1. La Comunidad Autónoma se someterá a las **condiciones de prudencia financiera** fijadas por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en los términos que se establezcan para el compartimento Fondo de Liquidez Autonómico.
2. A efectos de la aplicación del **ámbito subjetivo** de este programa se entiende por Comunidad Autónoma la delimitación contenida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, con las particularidades previstas para las propuestas de pagos directos a terceros derivadas de las necesidades de financiación del déficit público o con ocasión de retenciones sobre la financiación otorgada por la anualidad que deba satisfacerse en el ejercicio 2016 para abonar las liquidaciones negativas en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

No podrán integrarse en la financiación de este mecanismo operaciones entre los entes integrantes de cada comunidad conforme a la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación anteriormente definido, sin perjuicio de las particularidades previstas en este programa de aplicación. Asimismo, no podrán incluirse operaciones con unidades incluidas en cualquier subsector del Sector



Administraciones Públicas, salvo en los supuestos expresamente previstos en el presente programa.

3. La liquidez otorgada con el mecanismo deberá ser utilizada para atender:
 - a) Los vencimientos correspondientes a los valores emitidos.
 - b) Los vencimientos de préstamos concedidos por instituciones europeas de las que España sea miembro.
 - c) Los vencimientos de préstamos concedidos por entidades financieras residentes.
 - d) Los vencimientos de préstamos concedidos por entidades financieras no residentes.
 - e) Las necesidades de financiación del déficit público, incluyendo las correspondientes a desviaciones de déficit de años anteriores pendientes de financiar.
 - f) El endeudamiento contemplado en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera para financiar la anualidad que deba satisfacerse en el ejercicio corriente para abonar las liquidaciones negativas en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
 - g) Aquellas operaciones financieras que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

4. Con la finalidad de atender las operaciones señaladas en el apartado anterior, el mecanismo se instrumenta en tres tramos cuyos límites por Comunidad son fijados por Acuerdo de la CDGAE:
 - a. Tramo I relativo a vencimientos que incluye las categorías del punto tercero anterior incluidas en los apartados a), b) c), y d).
 - b. Tramo II, que incluye la categoría incluida en el apartado 3.f) anterior.
 - c. Tramo III: necesidades de financiación del déficit público, incluyendo los intereses asociados a los vencimientos a que se refiere el tramo I y que sean comunicados por la Comunidad Autónoma, con prioridad de pago de estos respecto al resto de conceptos financiados en este tramo III siempre que el importe de los intereses no supere el 15% del importe destinado a financiar el objetivo de déficit del ejercicio 2016. En este tramo se incluye la categoría incluida en el apartado 3.e) anterior.



En caso de que el importe de los intereses asociados a vencimientos y comunicados supere el 15% del importe destinado a financiar el objetivo de déficit del ejercicio 2016, se satisfarán con cargo al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico según el siguiente orden de prelación:

1. Los intereses asociados a vencimientos de valores emitidos.
2. Los intereses asociados a vencimientos de préstamos concedidos por instituciones europeas de las que España sea miembro.
3. Los asociados a vencimientos de préstamos concedidos por entidades financieras no residentes.
4. Los asociados a préstamos concedidos por entidades financieras residentes.
5. Los asociados a otros instrumentos de deuda PDE.

Las operaciones incluidas en la categoría g) del apartado tercero anterior se incluirán en el tramo correspondiente de los tres anteriores que se acuerde por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos dependiendo de la naturaleza de las operaciones que se financien.

5. **No podrán realizar operaciones instrumentadas en valores, ni operaciones de crédito a largo plazo, salvo previa autorización** expresa de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sin perjuicio de la autorización preceptiva del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. La realización de operaciones con instrumentos financieros derivados de cualquier naturaleza estará sujeta a autorización o comunicación, dependiendo de dicha naturaleza, según disponga la **Resolución de prudencia financiera** de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
6. Las condiciones financieras de todas las operaciones de crédito a corto plazo, que no estén sujetas a autorización conforme a la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberán ser **comunicadas a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera**. Dicha comunicación se acompañará del certificado de la Intervención General de la Comunidad Autónoma o unidad equivalente sobre el cumplimiento de las condiciones financieras.



7. **Los recursos del sistema de financiación** de cada Comunidad Autónoma de régimen común **responderán de las obligaciones contraídas con el Estado** con ocasión de la utilización del Fondo de Liquidez Autonómico.
8. El Estado, en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma, gestionará, con cargo al crédito concedido, el pago de los vencimientos de deuda pública de la Comunidad Autónoma, el endeudamiento contemplado en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera para financiar la anualidad que deba satisfacerse en el ejercicio corriente para abonar las liquidaciones negativas en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, así como los pagos correspondientes a las restantes necesidades de financiación del déficit público, en los términos previstos en el presente Programa, a través del Instituto de Crédito Oficial, como agente de pagos designado al efecto.
9. La Comunidad Autónoma suscribirá la correspondiente **operación de crédito** de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, las condiciones fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que serán debidamente comunicadas, y las condiciones fijadas en este programa.
10. El Estado concertará operaciones de crédito, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico, con cada una de las Comunidades Autónomas adheridas al mecanismo, por un importe que no podrá superar los recursos necesarios para atender los vencimientos de la Comunidad Autónoma que se financian con cargo al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico, las liquidaciones negativas en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, así como las necesidades de financiación del déficit público permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria, con los límites que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
11. Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, a la vista de la solicitud o comunicación presentada por las Comunidades Autónomas, de su situación financiera, de su perfil de vencimientos y de los flujos financieros del Fondo de Liquidez Autonómico, determinar, para las operaciones de crédito:
 - o El tipo de interés aplicable a las operaciones de crédito.



- o El plazo concreto de vencimiento de las operaciones de crédito.
- o En su caso, la procedencia de un periodo de carencia.
- o Los períodos de liquidación de intereses y amortización.
- o La posibilidad de efectuar cancelaciones anticipadas voluntarias sin penalización.

12. La amortización del principal se realizará respetando el principio de sostenibilidad financiera establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

13. PAGOS DE VENCIMIENTOS (TRAMO I) E INTERESES (TRAMO III)

1. Los pagos por vencimientos de principal e intereses que puedan satisfacerse con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico se efectuarán en la forma prevista en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se establecerán las condiciones de la operación de crédito que se formalice.
2. La Comunidad Autónoma remitirá una relación certificada por el Interventor General de la Comunidad Autónoma de los préstamos y otras operaciones contratadas con cláusulas de amortización anticipada, detallando los supuestos de activación de estas cláusulas y sus efectos, y continuará remitiéndolo en cada nueva operación.
3. El Estado, en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma, gestionará, con cargo al crédito concedido, **el pago de la cuota de vencimientos de deuda pública** de la Comunidad Autónoma y de los intereses asociados a estos vencimientos, a través del Instituto de Crédito Oficial, con los límites determinados conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre y en su caso, en el Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

14. PAGOS DERIVADOS DE LA ANUALIDAD QUE DEBA SATISFACERSE EN EL EJERCICIO CORRIENTE PARA ABONAR LAS LIQUIDACIONES NEGATIVAS EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LEY 22/2009 (TRAMO II)

1. La financiación con cargo al compartimento FLA de la anualidad correspondiente a las liquidaciones negativas que debe satisfacerse en el



ejercicio corriente en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se abonará a las respectivas Comunidades Autónomas, mensualmente, en los primeros 15 días naturales de cada mes a partir de la efectiva implantación en 2016 del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico para cada Comunidad Autónoma. En el primer mes en que se hagan efectivos los pagos por liquidaciones negativas se abonarán las mensualidades correspondientes a los meses anteriores. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá resolver adelantar las mensualidades pendientes del ejercicio, cuando la Comunidad Autónoma así lo solicite y concurren las circunstancias previstas en el párrafo siguiente y siempre que el Ministerio de Economía y Competitividad manifieste que la situación de caja del Tesoro así lo permite, lo que determinará la afectación de estos importes a las necesidades comunicadas.

Así, en el caso de que existan cantidades pendientes de pago con entidades vinculadas a sectores estratégicos o servicios fundamentales, cuya atención reporte a la Comunidad Autónoma un efecto directo en la reducción del déficit público, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá, de oficio o a solicitud de la Comunidad Autónoma, adelantar mensualidades pendientes del FLA del ejercicio correspondientes a la cobertura de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, con el fin de satisfacer tales cantidades, abonándose directamente a los titulares del crédito la cantidad fijada, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, siempre que se cumplan los requisitos y procedimiento establecidos con carácter general en este programa. En la determinación de estas cantidades se tendrá en cuenta la situación de la deuda pendiente con Entidades Locales, a la que se refiere el punto siguiente.

2. En el supuesto de que se den las circunstancias previstas en este programa para la aplicación del control reforzado por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, éste procederá de oficio a aplicar la financiación del FLA asignada para cubrir las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, a la cancelación de las deudas pendientes de pago de la Comunidad, que cumplan los requisitos establecidos en este programa, mediante el abono directo al acreedor. En la determinación de estas cantidades y su destino por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se tendrá en cuenta la situación de la deuda pendiente con Entidades Locales, a la que se refiere el punto siguiente, así como la deuda comercial existente y el cumplimiento de los periodos medios de pago por parte de la comunidad.
3. Cuando la Comunidad Autónoma tenga pendiente de pago transferencias a Entidades Locales, anteriores a 31 de diciembre de 2015, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará el importe de la financiación



con cargo al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico, correspondiente a la cobertura de las liquidaciones negativas 2008 y 2009, que se destinará a satisfacer tales cantidades, abonando directamente a las Entidades Locales la cantidad fijada, de acuerdo con los requisitos y procedimiento establecido, con carácter general, en este programa. A este respecto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá comunicar a la Comunidad Autónoma la priorización en el pago de las obligaciones a las que hace referencia la sección 3ª del capítulo III del título II del Real Decreto – Ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico.

15. PAGOS DE NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO VINCULADO A PROVEEDORES Y DETERMINADAS TRANSFERENCIAS (TRAMO III).

1. Las cuantías del Fondo de Liquidez Autonómico atribuidas a las Comunidades Autónomas para atender las necesidades de financiación del déficit público, excluidos los intereses, únicamente podrán destinarse a la cancelación de deudas pendientes de pago que cumplan las condiciones necesarias para su inclusión en alguna de las categorías enumeradas a continuación y conforme al orden de prelación establecido en este apartado.

Son susceptibles de abonarse pagos de la Administración General de la Comunidad Autónoma así como de los entes y organismos públicos dependientes de aquella, sobre los que se mantenga un poder de decisión sobre su gestión y sus normas internas o estatutos, así como las entidades asociativas en las que participe directa o indirectamente la Administración de la Comunidad. En ambos casos, debe tratarse de entidades incluidas en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional, si bien quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas por la Comunidad Autónoma con entidades que tengan la consideración de Administraciones públicas, en cualquiera de sus subsectores, conforme al ámbito definido por la contabilidad nacional, salvo en los casos previstos en este programa.

- a) **Pago a proveedores.** Se entiende por pagos a proveedores, las obligaciones derivadas de cualquiera de las siguientes operaciones de las Comunidades Autónomas, con la delimitación subjetiva señalada en el párrafo anterior:
 - i. Contratos de obras, suministros, servicios y gestión de servicios, de concesión de obras públicas y de colaboración entre el sector público y el sector privado.



- ii. Concesiones administrativas.
 - iii. Contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles.
 - iv. Concierdos y convenios educativos y de servicios sociales, así como sanitarios incluidos los suscritos con un hospital público siempre que este no forme parte de la definición de Comunidad Autónoma.
 - v. Convenios de colaboración a través de los que se instrumenten operaciones que computen en el cálculo del Periodo Medio de Pago a proveedores conforme a lo previsto en el último punto de esta letra. Dentro de estos convenios se identificarán, separadamente, los Convenios con farmacias, colegios de abogados y procuradores.
 - vi. Encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma.
 - vii. Subvenciones otorgadas en el marco de la contratación pública, en concepto de bonificación de las tarifas pagadas por los usuarios por la utilización de un bien o servicio, en la parte financiada por la Comunidad.
 - viii. Resto de operaciones no incluidas en los apartados anteriores que se computen en el cálculo del Periodo Medio de Pago previsto en la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, conforme a lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores.
- b) Transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro o ayudas directas a familias otorgadas para el desarrollo de actividades vinculadas con la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
- c) Subvenciones, transferencias, así como resto de operaciones con Entidades locales y Universidades. Serán asimilables a las operaciones recogidas en los apartados a) y b), las transferencias a Entidades Locales cuando tengan por finalidad la financiación de servicios públicos fundamentales prestados con medios ajenos a la Entidad Local con arreglo a alguna de las categorías anteriores y quede acreditada esta circunstancia mediante certificación de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
- d) La Comunidad Autónoma podrá proponer el pago de otras operaciones distintas de las previstas en los puntos anteriores, permitiéndose las propuestas de pago a entidades sectorizadas como Administraciones Públicas que no formen parte de la definición de Comunidad Autónoma, hasta un máximo del 25% del importe fijado como límite mensual

correspondiente para las propuestas de pago, mediante solicitud expresa al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, justificando la necesidad de tal solicitud. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá autorizar dicha propuesta atendiendo a la situación financiera de la Comunidad Autónoma y a la evolución de su periodo medio de pago.

En el ámbito del pago a proveedores, la propuesta formulada por la Comunidad atenderá especialmente a los servicios públicos fundamentales, educación, sanidad y servicios sociales, si bien tendrá en cuenta el cumplimiento del plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad. No obstante lo anterior, si los últimos datos disponibles del periodo medio de pago de proveedores de la Comunidad supera en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad en los dos últimos meses de forma consecutiva a contar desde la actualización de su plan de tesorería, en los términos previstos en el artículo 13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la propuesta de pago dará prioridad al pago de las facturas que superen en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad, computados dichos plazos en los términos establecidos en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, comenzando por los servicios públicos fundamentales. Excepcionalmente, la Comunidad Autónoma podrá solicitar la atención de pagos que no superen en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, previa solicitud al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y autorización previa por parte de éste.

2. Las operaciones relacionadas en el apartado anterior, para estar incluidas en el ámbito material de aplicación, deberán cumplir con las siguientes condiciones:
 - a) Ser obligaciones vencidas, líquidas y exigibles, y su factura, factura rectificativa en su caso o solicitud de pago equivalente debe haber sido presentada en el registro administrativo de la Comunidad Autónoma o en el Punto general de entrada de facturas electrónicas antes de la formulación de la propuesta de pago por parte de la Comunidad.
 - b) Deben ser facturas devengadas en 2016, o en años anteriores, y encontrarse consignadas en la ejecución presupuestaria o estados contables de la entidad en el momento de la propuesta de pago, no pudiéndose hacer efectivas mediante este mecanismo obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Las correspondientes a años anteriores deben estar contabilizadas en el Presupuesto del año correspondiente o en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones

pendientes de aplicar a presupuesto” o cuenta equivalente del citado año. En este último caso, tendrán que estar aplicadas a presupuesto con anterioridad a la propuesta del pago.

- c) Las obligaciones a atender, que pueden corresponderse con compromisos de pago fraccionados con el acreedor, deben tener una cuantía mínima de 180 €. Excepcionalmente, en el supuesto previsto en la letra b) del apartado 1 será posible la realización de pagos inferiores a dicho importe siempre que superen la cantidad de 180 euros.
3. La puesta en marcha del pago de las cuantías del Fondo de Liquidez Autonómico atribuidas a las Comunidades Autónomas para atender las necesidades de financiación del déficit público estará sujeta a las siguientes condiciones operativas:
- a) Las disposiciones del Fondo para financiar estas necesidades de liquidez se ajustarán a un calendario por tramos mensuales que se fijarán de acuerdo con lo previsto en la instrucción del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Instituto de Crédito Oficial para la formalización de la respectiva operación de crédito.
 - b) Determinados los tramos mensuales, la Comunidad Autónoma remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los primeros 15 días naturales de cada mes de aplicación de este mecanismo, una relación, con firma electrónica autorizada, de las facturas u obligaciones pendientes de pago que conforman la propuesta de pago del tramo al que se refieren. A la finalización del plazo de los 15 días naturales indicados anteriormente se remitirán la totalidad de las facturas o documentos acreditativos de la obligación de pago existentes en el momento de la remisión y susceptibles de ser atendidas por este mecanismo, por tener su origen en alguna de las operaciones previstas y cumplir con los requisitos exigidos, y que no vayan a ser atendidas a través de la Tesorería ordinaria de Comunidad, salvo que dicha información se pueda obtener por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la interconexión con el registro contable de la comunidad. En dicha remisión se incluirán, igualmente, en el caso de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya efectuado retenciones sobre los importes relativos a las liquidaciones negativas del ejercicio 2008 y



2009, los pagos propuestos con destino directo al acreedor de la Comunidad, en los términos previstos en este programa.

- c) Estas relaciones incluirán, al menos, el importe y la fecha de cada factura o documento acreditativo de la obligación de pago, así como la de inicio del cómputo del periodo de pago previsto en Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, la identificación del acreedor actual y en caso de cesión del crédito del acreedor originario, el tipo de deuda y la partida presupuestaria o cuenta contable en la que la obligación pendiente de pago está registrada. Dichas relaciones irán acompañadas de un certificado firmado electrónicamente por el Interventor General de la Comunidad, remitido por vía telemática, que certifique que las propuestas remitidas se ajustan a las condiciones definidas en el presente apartado del programa y en las demás normas y disposiciones que se dicten al respecto, con la información mínima que se prevea en el modelo que en su caso se establezca por el MINHAP, en el que constará al menos el importe de los pagos propuestos y los embargos comunicados por la Comunidad Autónoma. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá efectuar las correspondientes comprobaciones sobre las relaciones remitidas, lo cual puede determinar, entre otras consecuencias, la retirada de determinados pagos propuestos en el caso de entenderse que no se ajustan a los requisitos previstos, debiendo adaptarse, en su caso, el certificado remitido por el Interventor General de la Comunidad conforme a la relación definitiva de pagos a tramitar.
- d) De no recibirse el certificado anteriormente señalado en el plazo comunicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o no resultar el mismo conforme, podrá procederse a la paralización de las órdenes de pago correspondientes hasta su recepción o subsanación, tramitándose en tal caso los pagos correspondientes en el plazo que medie hasta el pago del siguiente tramo mensual, pudiéndose acumular ambas remesas.
- e) Es responsabilidad de las Comunidades Autónomas el cumplimiento de las disposiciones reguladoras del Fondo de Liquidez Autonómico y de su programa en relación a los pagos propuestos y demás necesidades financieras atendidas con el presente mecanismo, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pueda efectuar.

- f) En ningún caso, la Comunidad Autónoma podrá modificar el orden de prelación establecido sin autorización previa del MINHAP.
- g) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá modificar el orden de prelación de los pagos de las obligaciones pendientes en cada tramo, tomando en consideración, entre otros aspectos, la naturaleza del gasto, la consideración del proveedor o acreedor y el grado de aplicación de las medidas previstas por la Comunidad en el caso de que su periodo medio de pago exceda del plazo máximo de la normativa de morosidad. Para ello se basará en la información señalada en el apartado b del presente punto y en los datos disponibles por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la ejecución presupuestaria, deuda comercial, periodos medios de pago y situación de la tesorería de la Comunidad Autónoma, así como de la información contenida en los puntos generales de entrada de facturas y el registro contables de facturas de la comunidad y en los datos remitidos en el marco de los planes de ajuste vigentes para la Comunidad, entre otros. En este supuesto, la relación certificada del Interventor General de la Comunidad Autónoma se ajustará al orden comunicado por el Ministerio.
- h) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitirá antes de fin de mes la relación al Instituto de Crédito Oficial a fin de que se lleve a cabo desde este organismo el abono directo de las facturas y otras obligaciones de pago presentadas por las Comunidades Autónomas y conforme a las condiciones establecidas por las normas y disposiciones reguladoras de este mecanismo.
- i) Si en algunos de los meses el importe correspondiente al tramo de las necesidades de financiación del déficit público resultara superior al que se hubiera fijado por el Acuerdo correspondiente de la CDGAE, se aplicarían los criterios de priorización anteriormente descritos.
- j) Si en alguno de los meses el importe correspondiente al tramo de las necesidades de financiación del déficit público resultara inferior al que se hubiera fijado por el Acuerdo correspondiente de la CDGAE, se regularizará en el tramo del mes de diciembre.
- k) Sobre la base del resultado de las comprobaciones efectuadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como atendiendo al estado del suministro de la información a remitir en aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, se podrá



limitar el acceso a los siguientes tramos de financiación o la no disposición de importes en sucesivos tramos por la cantidad equivalente a la inclusión de obligaciones pendientes de pago que no cumplieran los requisitos previstos en el presente programa. A estos efectos, el acceso a los tramos de financiación por parte de las Comunidades Autónomas supone la aceptación de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la información o documentación solicitada que resulte necesaria para el ejercicio de tales comprobaciones o para solventar las incidencias observadas en el suministro de información.

4. La tramitación y propuesta de las relaciones de facturas y obligaciones pendientes de pago se ajustará adicionalmente a las siguientes condiciones:
 - a) La información se remitirá por las Comunidades Autónomas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que gestionará dicha información con especial colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en particular en cuanto a la gestión de los datos remitidos que podrán alojarse en sus servidores además de en los del propio Ministerio.
 - b) Esta información se remitirá al Instituto de Crédito Oficial para su correspondiente tramitación y gestión de los pagos.
 - c) La Comunidad Autónoma velará para que la elaboración de la relación de obligaciones pendientes de pago remitidas se realice bajo los principios de objetividad, transparencia e igualdad de trato de los proveedores que se encuentren en la misma situación, así como que dicha solicitud mantiene la debida consistencia con el plan de tesorería y resto de medidas previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, cuando el periodo medio de pago supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.
 - d) Las CCAA facilitarán a los acreedores por medios electrónicos el listado de las obligaciones que vayan a pagarse a través de este mecanismo. Asimismo, en el supuesto de que se haya subcontratado parte de la prestación, y con el fin de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Comunidad Autónoma comunicará al subcontratista el abono de la deuda al adjudicatario del contrato quien, de acuerdo con el artículo 227 de esta norma, habrá comunicado a la Administración



esta circunstancia con indicación de la parte de la prestación subcontratada y la identidad del subcontratista.

- e) El abono a favor del acreedor de acuerdo con la información facilitada por la Comunidad Autónoma conllevará la extinción de la deuda contraída por la Comunidad Autónoma con el acreedor por el importe satisfecho. La Administración General del Estado que interviene en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma sólo gestionará el pago de estas obligaciones con cargo al crédito concedido y queda exenta de cualquier responsabilidad al respecto.
 - f) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá solicitar a la Comunidad Autónoma, la cual debe proceder a su remisión en el plazo requerido, la documentación e información necesaria para la realización de las actuaciones de comprobación que puedan efectuarse con carácter previo o a posteriori al momento de la tramitación de las propuestas de pago.
5. Para la cobertura de desviaciones en los objetivos de déficit público de ejercicios anteriores pendientes de financiar se atenderán preferentemente las obligaciones pendientes de pago anteriores al ejercicio corriente. En todo caso se cumplirán las estipulaciones del presente programa que resulten de aplicación, y en concreto lo previsto en el presente punto decimoquinto, con la aplicación de los siguientes requisitos adicionales:
- a) Por el importe acordado acumulado en el ejercicio para la financiación de desviaciones de déficit de ejercicios anteriores pendientes de financiar con destino al pago a proveedores, que exceda del importe de la deuda comercial a fin del ejercicio anterior, habrá de certificarse por el interventor general de la comunidad autónoma que la deuda no financiera de carácter no comercial con origen en ejercicios anteriores se ha reducido en el ejercicio corriente al menos en dicho importe, con el límite de la deuda no financiera de carácter no comercial a fin del ejercicio anterior. Esta certificación firmada electrónicamente se remitirá a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, bien en el momento de elevar la propuesta definitiva de facturas en la que el importe acumulado de la financiación de déficit de ejercicios anteriores supere la deuda comercial a fin del ejercicio anterior o en un plazo no superior a dos meses desde dicho momento.
 - b) Los recursos asignados para la financiación de desviaciones de déficit de ejercicios anteriores pendientes de financiar no podrán determinar generaciones de crédito en el presupuesto de la

Comunidad Autónoma del ejercicio corriente, salvo hasta el importe resultante de minorar a las obligaciones pendiente de pago registradas en cuentas no presupuestarias a fin del ejercicio anterior la suma de aquellas otras generaciones de crédito que se hayan podido instrumentar en el ejercicio corriente con cargo a operaciones financieras y la regularización, en su caso, de mayores generaciones de crédito que en relación a este requisito se hayan tramitado en ejercicios anteriores. Así mismo, el importe de las generaciones de crédito no podrá superar el importe de las cantidades aplicadas a presupuesto procedentes de ejercicios anteriores de dichas cuentas no presupuestarias. Estas circunstancias deberán ser acreditadas en la certificación que acompañe a la propuesta de pago por parte del Interventor General de la Comunidad Autónoma o en una certificación posterior firmada electrónicamente en el plazo de 15 días desde la instrumentación de la generación de crédito con origen en los recursos asignados a los que se refiere el presente apartado.

- c) La falta de remisión de las certificaciones del Interventor General o el incumplimiento de los requisitos previstos a los que se hace referencia en las letras anteriores podrá condicionar el acceso a los siguientes tramos mensuales del compartimento del Fondo de Liquidez Autonómico o a la obtención de financiación adicional por desviaciones en el déficit público de años anteriores.

- 6. Las condiciones particulares y demás requisitos previstos en el presente punto decimoquinto del programa podrán ser objeto de adaptación o actualización por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Resolución del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, o por Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

IV. CONDICIONES FISCALES Y OTRAS CONDICIONES PARTICULARES

La aplicación del presente programa conllevará la aceptación por la Comunidad Autónoma de las condiciones fiscales establecidas en el artículo 25 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y de las condiciones particulares que se transcriben y detallan a continuación:

- 1. La Comunidad Autónoma que se adhiera a este mecanismo, en el plazo de siete días naturales desde la aprobación del acuerdo de su Consejo de Gobierno u órgano competente, deberá presentar y acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste, o una revisión del que ya tuviera en vigor, consistente con los objetivos de estabilidad y de deuda pública y con el plan económico-financiero o el plan de reequilibrio que, en su caso, hubiera



presentado, y que asegure el reembolso de las cantidades aportadas por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Si la Comunidad Autónoma ya tuviera aprobado un plan de ajuste, como consecuencia del acceso a otros mecanismos adicionales establecidos por el Estado conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica, 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberán acordarse con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los nuevos compromisos adquiridos. El Plan o sus modificaciones se presentarán con el contenido y formato establecido en los modelos normalizados que especifique el MINHAP.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en todo caso se procederá a la actualización anual del plan de ajuste en vigor de acuerdo al modelo que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El plan de ajuste incluirá un seguimiento de la evolución de las obligaciones pendientes de pago de la Comunidad Autónoma, estableciéndose una vinculación clara entre la reducción de su saldo y las cuantías percibidas con cargo al Fondo de liquidez.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá solicitar información sobre el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, morosidad y control de la deuda comercial y no financiera en el sector público, a efectos de llevar a cabo un seguimiento riguroso del importe pendiente de pago así como del cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores y de las medidas adoptadas y previstas por la Comunidad, para garantizar el cumplimiento de los plazos citados. Esta información podrá integrarse en los informes que publica mensualmente el MINHAP.

Si a la vista de la información anterior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no apreciase una vinculación clara entre la evolución de las deudas con proveedores y acreedores y las cuantías percibidas con cargo al Fondo de liquidez, así como una reducción del periodo medio de pago a proveedores compatible con el cumplimiento de la normativa de morosidad vigente, requerirá a la Comunidad Autónoma la justificación de esta circunstancia y su corrección. En caso de no atenderse el requerimiento, resultará de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional primera de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, además del resto de la normativa reguladora del Fondo de liquidez Autonómico.



3. Como parte del plan de ajuste, se presentará además de la información prevista en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la siguiente información, según los modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos que especifique la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local:
- a) Escenario económico – financiero para el ejercicio corriente y el siguiente, con el detalle de las medidas adoptadas y previstas en materia de gastos e ingresos, así como su calendario de implantación y efectos.
 - b) Información en materia de reordenación del sector público autonómico.
 - c) Cualquier otra información económico-financiera que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria.
4. El plan de ajuste incluirá, además de las medidas de ingreso y gasto necesarias para cumplir con los objetivos de estabilidad y para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez, el compromiso de avanzar en la reducción del sector público autonómico, suministrando información sobre su dimensión y estructura así como sobre los efectos previstos con las medidas adoptadas en los procesos de reestructuración, la supresión de las barreras o trabas al mercado interior y la eliminación de cargas administrativas para empresas y autónomos, así como cualquier otra reforma estructural destinada a aumentar la competitividad y flexibilidad económica. En particular, el plan de ajuste incorporará adicionalmente:
- 4.1 Buenas prácticas en materia de gestión económica y presupuestaria, entre otras. Las Comunidades Autónomas se comprometen a derogar normas de gestión económico-presupuestarias que puedan ser contrarias a los principios del presupuesto.
 - 4.2 Compromiso de las CCAA a participar en el grupo de trabajo, creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para la racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público autonómico. Las Comunidades Autónomas que se adhieran al Fondo se comprometen a implantar en sus respectivas administraciones las conclusiones que adopte el grupo de trabajo.
 - 4.3 Compromiso de adoptar las medidas que se acuerden en el grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera creado por el Acuerdo 3/2013, de 21 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de creación del grupo de trabajo para la elaboración de un **programa de**



racionalización administrativa. Este grupo elaborará un programa de racionalización administrativa que contendrá una serie de medidas seleccionadas del Informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (**CORA**), elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, para que sean aplicadas por las Comunidades Autónomas.

- 4.4 Compromiso de adoptar las medidas necesarias para su adhesión a los **acuerdos marco y sistemas de adquisición centralizada** que pueda desarrollar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, salvo autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas sobre la justificación aportada de las causas por las que se considera impropcedente su adhesión.
 - 4.5 Compromiso de adoptar las actuaciones necesarias para su adhesión a las demás medidas tendentes a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que hayan sido informadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y a no aprobar una cartera de servicios complementaria, salvo autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas sobre la justificación aportada de las causas por las que se considera impropcedente la aplicación de tales medidas o la no aprobación de una cartera de servicios complementaria.
5. En los cinco primeros días hábiles y en todo caso antes del día quince de cada mes la Comunidad Autónoma enviará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el contenido y formato establecido en los modelos normalizados que especifique el MINHAP, la información actualizada sobre el seguimiento y ejecución del plan de ajuste a través de su intervención general o unidad equivalente. La información relativa al último mes del ejercicio se remitirá antes del 31 de enero del año siguiente, coincidiendo con el plazo para el envío de información sobre ejecución presupuestaria de dicho mes, y será objeto de actualización con anterioridad al 30 de abril.

6. **Control reforzado.**



Adicionalmente, la remisión mensual sobre la ejecución del Plan de ajuste a remitir por la comunidad autónoma incluirá la siguiente información:

- Detalle del destino de los recursos mensuales asignados a la Comunidad en concepto de recursos del sistema de financiación sujetos a liquidación. El MINHAP, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada comunidad, podrá determinar los gastos por el importe máximo equivalente al de dichos recursos que, con carácter prioritario, tendrán que atenderse por la Comunidad. En todo caso, MINHAP velará por que se respete la obligación constitucional de atender en primer lugar los intereses de la deuda no atendidos por el FLA.

Asimismo el MINHAP podrá fijar la adopción de medidas concretas de contención del gasto público en el supuesto de que se aprecie inconsistencia entre la evolución de los recursos del sistema de financiación y la senda de gasto de la Comunidad, en el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para 2016.

- Análisis sectorial de los pagos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, que incluirá para cada uno de estos sectores:
 - las cantidades pagadas y propuestas de pago tanto a través de la tesorería ordinaria como a través del FLA con identificación de la categoría de contrato en la que se incluyen y la naturaleza económica del gasto.
 - las cantidades pendientes de pago correspondientes tanto a categorías incluidas en el ámbito del FLA como a gastos no financiados a través de este mecanismo, principalmente transferencias a empresas privadas y públicas, y a instituciones sin fines de lucro y familias.
- Información sectorial agregada, con el nivel de detalle que determine el MINHAP, de los pagos realizados, propuestos y pendientes, relativos a conceptos no incluidos en el FLA y distintos de los señalados en el punto anterior.
- Seguimiento particular, con el detalle que se establezca, del estado de ejecución del gasto público de la comunidad y sus entes dependientes, así como de determinadas líneas de gasto que, por razón de cuantía, evolución, naturaleza económica o finalidad, el MINHAP determine que tienen que ser objeto de un seguimiento especial en el ámbito de una Comunidad concreta.

En el caso de ser de aplicación lo previsto en este apartado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas procederá, de oficio, a retener la financiación



del FLA, destinada a cubrir las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, para atender a la cancelación de las deudas pendientes de pago de la Comunidad, que cumplan los requisitos establecidos en este programa, mediante el abono directo al acreedor. Se atenderá, principalmente, a la cancelación de deudas anteriores a 2016.

Esta retención dejará de practicarse cuando la Comunidad Autónoma quede excluida del control reforzado de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente.

En cualquier caso, del destino de los fondos que se satisfagan directamente a las Comunidades Autónomas para financiar las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 se informará, a través del seguimiento mensual del plan de ajuste, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quien a la vista de esta información podrá determinar la aplicación obligatoria de la financiación a determinados gastos pendientes de pago.

7. Casos de posible exclusión del control reforzado.

El apartado 6, relativo al control reforzado, no será de aplicación a las Comunidades Autónomas adheridas para las que se compruebe que cumplen todas las condiciones siguientes:

- Cumplimiento del objetivo de déficit de 2015, una vez conocido el avance del déficit, el déficit provisional o el definitivo de la Comunidad para 2015 calculado por la IGAE en el marco de las notificaciones a Eurostat previstas en el Protocolo sobre procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (PDE).
- Valoración del MINHAP de no existencia de riesgo de incumplimiento del objetivo de 2016 a lo largo del ejercicio. A estos efectos se realizará un seguimiento del presupuesto aprobado, en sus diferentes fases de ejecución, así como de las operaciones a tener en cuenta en el cálculo del déficit en términos de contabilidad nacional.
- Cumplimiento durante dos meses consecutivos del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad en relación al periodo medio de pago, calculado conforme a la metodología prevista en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio. Así mismo, podrá considerarse la información sobre plazos legales de pago a proveedores comunicados al MINHAP y situación y evolución de la deuda comercial o deuda no financiera de la Comunidad Autónoma.



- Cumplimiento de las obligaciones de suministro de la información necesaria para el seguimiento de las circunstancias anteriores o de las contenidas en la Orden Ministerial 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrolla las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

En caso de incumplir alguna de las condiciones anteriores, el MINHAP podrá volver a aplicar el control reforzado regulado en el apartado 6 del presente programa.

V. SEGUIMIENTO Y CONTROL

1. Las Comunidades Autónomas deben **permitir el acceso y remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la información** prevista en el artículo 25.e) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. El envío y captura de esta información se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos.
2. Las Comunidades Autónomas **deben sujetarse a la supervisión** por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la adopción y ejecución de las medidas previstas en el plan de ajuste conforme a lo señalado en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre.
3. El órgano de control interno de la Comunidad Autónoma garantizará el adecuado registro de las obligaciones enviadas para su pago mediante el FLA en la contabilidad de la Comunidad Autónoma y efectuará los controles y conciliaciones necesarias para evitar que produzcan pagos duplicados a través del FLA y de la Tesorería ordinaria de la Comunidad Autónoma o con otros mecanismos de financiación habilitados. Así mismo, velará por la adecuada aplicación del plan de ajuste, a cuyos efectos realizará cuantas actuaciones sean necesarias y, en su caso, dejará constancia de su no adopción o incumplimiento en la información de seguimiento del correspondiente plan de ajuste que, dentro de los cinco primeros días de cada mes, enviará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta información será tenida en cuenta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el seguimiento de los planes de ajuste.

- En el caso de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas **detecte riesgos de incumplimiento o incumplimiento** de las medidas del plan de ajuste, propondrá su modificación con la adopción de nuevas medidas o la alteración del calendario de su ejecución, pudiendo solicitar a la Intervención



General de la Administración del Estado que acuerde las actuaciones necesarias para llevar a cabo una misión de control.

- En todo caso, el cumplimiento de las medidas propuestas condicionará la concesión de los sucesivos tramos de préstamo salvo las cantidades destinadas a cubrir los vencimientos de emisiones en mercados de capitales y de préstamos concedidos por instituciones europeas de las que España sea miembro y demás préstamos concertados con bancos no nacionales, así como los intereses asociados a estos vencimientos.
- Cuando la Intervención General de la Administración del Estado envíe una misión de control ésta tendrá como objetivo concretar el diagnóstico de la situación financiera de la Comunidad Autónoma en el marco de los compromisos adquiridos en el plan de ajuste, aplicando las técnicas y metodologías de control que se estimen oportunas.
- El órgano de control interno de la Comunidad Autónoma prestará toda la ayuda y colaboración que sea necesaria a la misión de la Intervención General de la Administración del Estado, que tendrá acceso a la totalidad de la documentación de la Comunidad Autónoma, para el buen desempeño de sus funciones.
- En el plazo máximo de un mes desde que se inicie la misión de control, la Intervención General de la Administración del Estado emitirá un informe sobre la adecuación financiera de las previsiones recogidas en el plan de ajuste en vigor y los incumplimientos o riesgos de incumplimiento del mismo.
- Dicho informe será remitido al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a los efectos de aplicar lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- La falta de remisión, o la valoración desfavorable del plan de ajuste darán lugar a la inadmisión de la adhesión al compartimento o, en su caso, la suspensión de su participación en el mecanismo. La falta de actualización del plan de ajuste, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de información detalladas en este programa, así como cualquier otro incumplimiento del plan de ajuste dará lugar a la aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

VI. TEMPORALIDAD.

El presente programa se incluirá como anexo de los Acuerdos de Consejo de Gobierno autonómicos para la adhesión o permanencia en el mecanismo y compromete a las Comunidades Autónomas que se hayan adherido a este mecanismo. En ejercicios



posteriores al 2016, este programa mantendrá su vigencia pero podrá ser revisado o ampliado, comprometiéndose las Comunidades Autónomas, en este caso, a adoptar un nuevo Acuerdo del Consejo de Gobierno u órgano competente.

